



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, veintitrés de octubre de dos mil veintitrés

A21-186

Asunto: NULIDAD
Demandante: MARIA CELINA OCHOA BARRIENTOS
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Radicado No.: 05001-31-05-014-2019-00562-01
DECISIÓN: DECLARA NULIDAD POR FALTA DE JURISDICCIÓN

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, antes de conocer el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia encontramos necesario analizar un asunto puntual que impide a esta Magistratura pronunciarse de fondo.

1. ANTECEDENTES:

La señora **MARIA CELINA OCHOA BARRIENTOS** a través de apoderado judicial, presentó demandada ordinaria, pretendiendo que se CONDENE a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP** a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su compañero permanente **MIGUEL ÁNGEL BARRIENTOS RODRÍGUEZ**, desde la fecha de su deceso, junto con la indexación y las costas del proceso.

Conoció en primera instancia Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, en **sentencia** proferida el 12 de julio de 2021 **ABSOLVIÓ** a la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP** de todas las pretensiones formuladas en su contra por la señora **MARIA CELINA OCHOA BARRIENTOS**, a quien se abstuvo de condenar en costas. Tal decisión fue oportunamente apelada por el apoderado del demandante.

Sin embargo, antes de resolver lo pertinente, observa la Sala que se presenta una nulidad insubsanable por falta de Jurisdicción y competencia funcional para conocer del presente asunto, toda vez que se trata de una controversia referente a la seguridad social, entre un empleado público y entidad de derecho público como administradora de dicho régimen, siendo competente para conocer del asunto la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por las siguientes razones:

Según lo establecido en el artículo 16 del Código General del Proceso, la jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables, debiéndose enviar el proceso de inmediato al Juez competente en los casos en que ésta sea declarada; la norma es del siguiente tenor:

“(…) La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo (…).”

A su vez, el art. 138 ibídem, adicional a lo expuesto, señala que si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará. Expresamente indica que:

“(…) Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y **el proceso se enviará de inmediato al juez competente**; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará.

La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla, y se mantendrán las medidas cautelares practicadas (…).” (Resalto fuera de texto).

Aclarado lo anterior, tenemos que de conformidad con el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 2° de la Ley 712 de 2001 y específicamente en el numeral 4°, modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012¹; la Jurisdicción Ordinaria en sus especialidades Laboral y de la Seguridad Social conoce de: “...*las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social, que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos...*”.

Por su parte, la Jurisdicción Contencioso Administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, conoce entre otros, de los asuntos que versan sobre controversias concernientes a la relación legal y reglamentaria, entre los servidores públicos y el Estado, así como la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una entidad de derecho público. Norma que es del siguiente tenor:

¹ Publicada en el Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012, la modificación rige a partir de su promulgación.

“... **Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.** La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

(...)

4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y **la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público...** (Negritas fuera de texto).

Bajo este panorama, encuentra la Sala que el causante MIGUEL ÁNGEL BARRIENTOS RODRÍGUEZ, tenía la calidad de pensionado, prestación que le fue reconocida por la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN a través de Resolución No. 022271 del 13 de agosto de 1998 (fl 24 del archivo 01) por haber laborado en el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y en la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y según certificación expedida por esta última entidad, visible a folios 1/2 del archivo 02 contenido del expediente administrativo del causante, su último cargo en la entidad fue como INVESTIGADOR JUDICIAL II, en el CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, es decir, tenía la calidad empleado público al servicio de la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN.

Por tanto, como la presente demanda fue radicada en la Oficina de Apoyo Judicial el día 27 de septiembre de 2019, conforme se visualiza a folio 8, de tal manera que para la mencionada fecha ya se encontraba vigente el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, que comenzó a regir el 2 de julio de 2012 conforme lo preceptuado en el art. 308, señalando que el mismo se aplicaría a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se iniciaran, así como a las demandas y procesos que se instauraran, con posterioridad a su entrada en vigencia.

Aunado a lo anterior, la demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP es una entidad de derecho público.

Así las cosas, en atención a lo expuesto y a lo establecido en los artículos 108 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el 16 y 138 del Código General del Proceso, no es esta la Jurisdicción competente para conocer del asunto, al tratarse de conflicto relativo a la seguridad social, de los beneficiarios de un empleado público, regido por relación legal y reglamentaria contra una entidad de derecho público.

Por tanto de conformidad con el primer inciso del artículo 138 del Código General del Proceso, a la luz de la sentencia C-537 de 2016 que lo declaró exequible, atendiendo a la prevalencia de lo sustancial sobre las formalidades y al derecho fundamental al acceso a la justicia, permite colegir que lo

procedente es declarar la nulidad de la sentencia que por vía de apelación estamos conociendo y enviar el proceso a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Así las cosas, **se declarará la nulidad de todo lo actuado desde la sentencia, inclusive, debiéndose remitir el proceso a los Juzgados Administrativos de Medellín para su reparto.**

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **DECRETA** la **NULIDAD** de lo actuado desde de la sentencia, inclusive.

SEGUNDO: Se ordena **REMITIR** el proceso a los **Juzgados Administrativos de Medellín** para su reparto.

TERCERO: Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** y se ordena comunicar la anterior decisión al juzgado de origen.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que la providencia anterior fue notificada por
ESTADOS No. 181 fijados hoy en la secretaria de
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 24 DE OCTUBRE DE 2023

Secretario